



 **realidad  
económica**

Nº 329 • AÑO 49

16 de noviembre al 1º de diciembre de 2019

ISSN 0325-1926

Páginas 105 a 151

---

PROBLEMÁTICA AGRARIA

**IX Jornada Debate Cátedra Libre de Estudios  
Agrarios Ing. Agr. Horacio Giberti**

## **La cuestión agroalimentaria\***

Carlos Carballo, Omar Príncipe, Nahuel Levaggi,  
Mercedes Caracciolo

---

\* Como es tradicional desde la creación de la "Cátedra Giberti" de la Facultad de Filosofía y Letras (UBA), también en el 2019 se realizó la IX Jornada anual, el 29 de agosto. Fue organizada por la Cátedra Libre de Estudios Agrarios "Ing. Agr. Horacio Giberti", el Instituto Argentino para el Desarrollo Económico (IADE) y la revista Realidad Económica y auspiciada por el Centro Cultural de la Cooperación "Floreal Gorini".



## Resumen

A pesar de que el sector agropecuario de Argentina detenta una capacidad productiva que podría alimentar varias veces el número de habitantes existentes en el país, los problemas estructurales existentes en el mismo y las políticas económica y agropecuaria vigentes, determinaron en los últimos años un escaso crecimiento sectorial. La fuerte devaluación del peso desde fines de 2015 hasta hoy, la falta de compensación de la misma con cobro de derechos a la exportación de los productos agroexportables, la apertura de la importación a productos primarios y agroalimentarios, la desregulación total en las cadenas de comercialización internas y externas, la concentración del uso del suelo fundamentalmente en cinco o seis cadenas orientadas a la exportación, el empobrecimiento de las economías regionales, y el debilitamiento de la pequeña y mediana producción agropecuaria en todas las regiones, entre otros, fueron los ejes de una política económica para el sector agropecuario que lejos de traccionar al resto de la economía, condujeron a primarizar las cadenas, reduciendo el valor agregado industrial, la demanda de fuerza de trabajo y concentrando aún más la oferta productiva. El objetivo de esta Novena Jornada es analizar y debatir sobre estos temas.

**Palabras clave:** Política agropecuaria – Sector agroalimentario – Acceso alimentos

## Abstract

### Ninth IADE Debate Conference - Open Professorship of Agrarian Studies "Agr. Eng. Horacio Giberti" The Agri-food Issue

Despite the Argentine agrarian sector's productive ability to feed several times the country's existing number of inhabitants, its structural issues and the current economic and agrarian policies have determined little growth in recent years. The strong devaluation of the Argentine peso since late 2015 up to date, its lack of compensation by way of collection of export agro-goods taxes, the opening for importation of primary goods and agri-food products, the total dis-regulation in internal and external trade chains, the concentration of the use of land - fundamentally among five or six export-oriented chains -, the impoverishment of regional economies, the weakening of smaller and intermediate agrarian production in all regions, among other issues, have been the axes of an economic policy for the agrarian sector, which, far from pulling along the rest of the economy, fostered the primarization of chains, reducing industrial added value, demand for workforce and further concentration of productive supply.

**Keywords:** Agrarian policy - Agri-food sector - Access to food

SEGUNDA MESA REDONDA

## La producción agropecuaria y la problemática de acceso a los alimentos

### Alimentación saludable y agroecología

#### Carlos Carballo

Ingeniero agrónomo. Magíster en Política y Gestión de la Ciencia y la Tecnología del Centro de Estudios Avanzados de la Universidad de Buenos Aires (CEA-UBA). Profesor de Extensión y Sociología Rurales. Coordinador de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria en la Facultad de Agronomía de la UBA (CaLiSA-FAUBA) desde su creación, en 2011, hasta abril de 2019.

**A** partir de una nueva crisis alimentaria se hace manifiesta una de las consecuencias más graves del modelo de crecimiento adoptado por nuestro país en las últimas décadas, en las que las decisiones con respecto al qué, quiénes, cómo, por qué y para qué se producen y consumen los alimentos quedaron libradas a la decisión de los actores clave en el Sistema Agroalimentario Argentino (SAA). Las organizaciones y movimientos sociales han destacado la necesidad de que se adoptasen en forma urgente un conjunto de medidas para atender demandas sociales complejas –como la alimentación, la vivienda y el trabajo– de un elevado porcentaje de la población argentina.

Aunque primen las urgencias dadas por la crisis alimentaria y se procure lograr la seguridad alimentaria, al incorporarse temáticas relacionadas con el carácter de “sano” o “saludable” también se avanza sobre propuestas –con diferentes grados de visibilización y de adhesión– relacionadas con el comercio-precio justo, el consumo responsable y la solidaridad entre organizaciones de productores responsables y consumidores/ciudadanos solidarios. Esto favorece el fortalecimiento de numerosas experiencias, así como el reconocimiento de los distintos eslabones o etapas del SAA, su dinámica, las interrelaciones existentes y el rol de los actores participantes.

A pesar de la mayor precisión en los diagnósticos, algunos temas significativos permanecen ausentes, situación explicable tanto por la complejidad de la actual coyuntura –nacional, regional e internacional– como por las limitaciones para pensar más integralmente un Plan Nacional de Desarrollo que sea económica, social, ambiental, cultural, política y éticamente más equitativo y sustentable. Ello incide en las dificultades para relacionar políticas para la coyuntura con políticas de mediano-largo plazo que, necesariamente, implican transformaciones en la estructura y en la democratización de la economía y la sociedad.

Sin cuestionar las intenciones o criterios con que se evalúa el escenario actual, se considera que priman los abordajes parciales, que toman aspectos particulares de la sumamente interrelacionada problemática del SAA, su concentración y transnacionalización no pueden soslayarse si se quieren superar las “emergencias” alimentarias periódicas que se sucedieron en los últimos cien años. Es necesario democratizar ese sistema desde la producción al consumo, lo que necesariamente implica participación social y un rol del Estado enmarcado en objetivos de justicia y sustentabilidad. A tal fin, es necesario incorporar al debate marcos normativos que contribuyan a la integralidad de las propuestas y orienten las medidas que consideramos urgentes.

La agricultura familiar –cuya caracterización debe ser profundizada– es valorada ahora por su posibilidad de contribuir a la alimentación saludable de la población y al desarrollo sustentable. Para ello, no solo hay que superar su sistemática discriminación negativa, sino que –además de la reglamentación de la Ley de Agri-

cultura Familiar y la asignación de los correspondientes recursos– es necesario articularla con otras propuestas, como las de “protección de cinturones verdes productivos”, arraigo y “Marcha al Campo”, en las que se detiene esta ponencia. La transición hacia la soberanía alimentaria implícita en ellos se asienta sobre tres pilares: la agroecología, la economía social y la participación activa de los ciudadanos/consumidores.

## Introducción

Nos encontramos ante un viejo problema, pero en un contexto particular que caracterizamos como emergencia alimentaria. Atender a esta cuestión constituye una prioridad, comprender sus características y sus causas ayudaría a visibilizar la problemática alimentaria y nutricional como un componente fundamental de la soberanía alimentaria, la justicia y la sustentabilidad económica, social, ambiental, cultural, política y ética de nuestra sociedad.

La gravedad de la problemática alimentaria, nutricional y de salud de la población comienza a reconocerse como parte de una crisis alimentaria que deja expuestas algunas de las consecuencias más negativas de las políticas de las últimas décadas y de la política neoliberal ejecutada desde 2015. La proximidad de las elecciones para elegir autoridades del Estado hace que la temática esté presente no solo en los reclamos, sino también en los foros y debates en los territorios. En muchos casos, la seguridad alimentaria de la población aparece como un objetivo inmediato, para lo cual se consideran necesarias medidas de distinta índole que –según las propuestas– inciden en la producción, circulación y consumo de alimentos.

Aunque primen las urgencias dadas por la crisis, al incorporarse temáticas relacionadas con el carácter “sano” o “saludable” de los alimentos también se avanza sobre propuestas –que gozan de distintos grados de visibilización y adhesión– relacionadas con el modelo productivo agrario, el comercio-precio justo, el consumo responsable y la relación entre las organizaciones de productores responsables y consumidores/ciudadanos solidarios. Algunos de estos aspectos se encuentran incorporados en las medidas propuestas para la emergencia alimentaria: asistencia

directa a comedores escolares y comunitarios; disminución de precios, costos e impuestos; apoyo a la autoproducción; generación de empleo e incremento de los ingresos de asalariados y jubilados; regulación del etiquetado de los alimentos y su publicidad; apoyo a la agricultura familiar; etcétera.

La “agricultura familiar” es crecientemente valorada por su potencialidad para contribuir a la alimentación saludable de la población y a un modelo distinto de producción y consumo de alimentos, la agroecología constituye una referencia imprescindible al respecto. Para ello, no solo hay que superar la sistemática discriminación negativa hacia quienes poseen menos recursos, sino que –además de la urgente reglamentación de la Ley de Agricultura Familiar y asignación de los correspondientes recursos– es necesario articular estas propuestas con otras. Consideramos que la participación organizada y consciente de la sociedad urbana es fundamental.

## Situación actual

Entre junio de 2018 y junio de 2019 las ventas en los supermercados y shoppings cayeron 12,6% y 22,9%, respectivamente, a precios constantes; el 72% de los consumidores abandonó o redujo el consumo de carne vacuna, y aumentó el de fideos y arroz en el 50% de la población. Por otra parte, creció considerablemente la asistencia de niños a los comedores escolares y de familias enteras a comedores, merenderos y centros de distribución de alimentos. Es alarmante la falta de alimentos provistos por el Estado en los demás lugares, que no se logra compensar con la solidaridad de los vecinos e incrementa el reclamo de una Ley de Emergencia Alimentaria.

110

Todo ello sucede sin que pueda decirse que en el país faltan los alimentos básicos que conforman la dieta de la mayoría de los argentinos y en base a los que se calcula la Canasta Básica Familiar. Este faltante solo ocurriría con las frutas y verduras, si consumiéramos lo que se recomienda; pero eso solo lo hace una mínima parte de los habitantes.

Superada la mayor sequía de los últimos cincuenta años, se recuperó la producción de los principales granos y se alcanzaron nuevos récords de producción (147 mil toneladas) y exportación; del mismo modo creció la exportación de carnes. Pero también se dio un aumento en el costo para alimentarse: la Canasta Básica Total y la Canasta Básica Alimentaria se sitúan en \$30.338 y \$12.087, respectivamente; por debajo de esos valores las familias son pobres o indigentes. En 2018, la pobreza alcanzó al 35% de la población y a más del 50% de los niños; la indigencia –personas que no tienen lo mínimo para comer– superó los 3 millones de personas. La desocupación rebasó el 10% y el 43,9% de los ocupados son trabajadores informales, cuyos ingresos medios son de \$10.283 por mes, por debajo del salario mínimo legal; el 80% de ellos carece de aportes, jubilación y obra social. Persiste la pobreza rural y también la migración proveniente del campo de las familias de productores y de los trabajadores sin tierra.

## Un problema tradicional en un nuevo contexto

### Problema tradicional:

“Siempre hubo pobres”, afirman algunos. Estudios y referencias no faltan para demostrarlo. Pobreza y explotación en el “granero del mundo”, como se denuncia en *El estado de las clases obreras en Argentina a comienzos de siglo* (Bialet-Masse, 1904); la falta de trabajo y la miseria urbana generalizadas en los años 30, la Década Infame; el hambre de “nuestros changuitos” que “clama al cielo”, destacada por el presidente Juan Perón cuando proclamó la nueva Constitución Nacional, en 1949; el Programa Alimentario Nacional (PAN) que promovió el presidente Raúl Alfonsín, en 1983, y aprobó rápidamente en el Parlamento, como una política pública para atender la emergencia alimentaria dejada por la dictadura militar. Más recientemente, la desocupación y pobreza masiva de 2001-2003, época en que incluso se intentó paliar el hambre con la “soja solidaria” y una mal llamada “leche de soja” resultante de la elaboración en escuelas y comedores populares de los granos transgénicos donados por el mundo de los agronegocios.

Es importante destacar que se siguen generando alimentos para más de 400 millones de personas, o –más apropiadamente– materias primas para los cerdos, aves, peces, vacas, etcétera, que consumen sectores medios de la población mun-

dial. Ahora bien, más de 800 millones de hambrientos del mundo –y los de Argentina– y una proporción tres veces superior de malnutridos constituye solo una referencia secundaria para quienes manejan el Sistema Agroalimentario Mundial (SAM). En Argentina y en el mundo sobran alimentos, ya que la producción supera el consumo medio per cápita estimado por los organismos internacionales.

La diversidad de programas alimentarios con creciente articulación –inicialmente– y el reconocimiento de los derechos básicos de la población vulnerable a través de la Asignación Universal por Hijo (2008) no alcanzaron totalmente sus objetivos, por lo que asistimos a la no cumplida promesa de “pobreza cero” y “hambre cero” (2015), tal como se manifiesta a través de la demanda social y de numerosos indicadores.

### **Nuevo contexto mundial y nacional:**

Contexto internacional: A nivel mundial, distintos pensadores reconocen la existencia superpuesta de cuatro crisis, situación inédita en la historia del capitalismo: la crisis económico-financiera, que se generaliza a partir de la “crisis de las hipotecas” de 2008; la crisis energética; y la crisis alimentaria, a las que se suma con sus múltiples y catastróficas consecuencias la crisis climática global (Beinstein, 2009). Además de estas cuatro crisis, comienza a hacerse evidente la crisis del trabajo, consecuencia de la acelerada expansión de la robótica y la inteligencia artificial (factores que caracterizan la Cuarta Revolución Industrial en curso). La crisis del trabajo tiene una amplia repercusión en nuestro país debido al elevado nivel de concentración existente en todos los sectores de la economía y los servicios.

En Argentina, son ampliamente conocidas las consecuencias de los fenómenos mencionados, aunque aún sorprenda la magnitud alcanzada por la crisis alimentaria, con indicadores claros relacionados con el acceso al consumo. La crisis alimentaria también expresa otros indicadores como los referidos a la malnutrición, provocada no solo por el elevado procesamiento industrial de los alimentos o “ultraprocesamiento”, sino también por la contaminación resultante de la desaprensiva aplicación de agrotóxicos por parte de la mayoría de los productores en, prácticamente, todos los sistemas productivos y todos los territorios del país.



Contexto argentino: La crisis alimentaria podría resultar impensable en un gran productor de alimentos como Argentina; sin embargo, está presente más allá de que no exista un contexto de guerra o catástrofe natural que la pueda justificar. De aquí que no se deberían independizar las propuestas para esta emergencia: se debe atender en conjunto la mirada más integral del SAA y la del SAM. Tomando como referencia las principales orientaciones de las propuestas conocidas, y atentos a los objetivos de esta ponencia, se reflexiona a continuación sobre las tres problemáticas que se deben contemplar en el momento inicial del análisis: la alimentación y la salud de la población, el hacinamiento urbano y los territorios despoblados, y la agricultura familiar.

La alimentación no saludable y la enfermedad: Alrededor del 70% de los habitantes de Argentina padece de sobrepeso u obesidad, una tendencia creciente que también se observa a nivel internacional –según denuncia la Organización Panamericana y la Organización Mundial de la Salud– como obvio resultado de cambios culturales y alimentarios (pensemos en la pésima alimentación con que nos saturan las grandes empresas a través de todos los medios de comunicación, ante la pasividad o complicidad de los Estados). La población con colesterol alcanza al 30% y el 10% posee diabetes, mientras aumenta la predominancia de distintas enfermedades no transmisibles (ENT), muchas de ellas consideradas como epidemia por la Organización Mundial de la Salud.

A pesar de la falta de estadísticas y el evidente no registro de situaciones de intoxicación aguda o crónica, los 500 millones de toneladas (o 500 mil millones de litros) de agroquímicos aplicadas anualmente y la toxicidad de los productos utilizados impactan directamente en quienes los aplican, los ocupantes de áreas próximas, el ambiente en general y también en los alimentos que llegan a los mercados. La problemática de las frutas y hortalizas en los grandes mercados concentradores ha sido sistemáticamente denunciada.

Hacinamiento y territorios vacíos: Según el Censo Nacional de Población y Vivienda 2010, más del 90% de los 45 millones de habitantes viven en urbes que en algunos casos son parte de grandes conglomerados urbanos; estos y el resto de las capitales de provincia cuentan con 4.000 habitantes/km<sup>2</sup>, aunque la situación sea

explosiva en algunas áreas, como sucede en 4.286 villas donde se asientan 3,5 millones de habitantes con una densidad de 8 mil habitantes/km<sup>2</sup>, según el Registro Nacional de Barrios Populares (2016). Además, existen otros 12 millones de habitantes cuyo hogar está por debajo de las condiciones mínimas adecuadas. Una elevada proporción de jóvenes urbanos definidos como la generación “ni-ni”, ya que *ni* estudian *ni* trabajan, son integrantes de estas comunidades.

La población rural, por su parte, cayó drásticamente a menos de 5 millones de personas, dispersas en 2,7 millones de km<sup>2</sup>, con una densidad de 1,8 habitantes/km<sup>2</sup>, un verdadero desierto, facilitador de todo tipo de negocios legales –aunque no sean legítimos, como el extractivismo– e ilegales. El avance de los agro-negocios y la frontera agraria generó aumentos de producción y exportación, pero multiplicó los problemas estructurales, degradó el medio, empobreció y expulsó a muchos de sus habitantes; aspectos que nos es imposible cuantificar debido a la falta de estadísticas recientes o confiables.

Es similar la cantidad total de población en las áreas rurales a la existente en villas, barrios, asentamientos urbanos y periurbanos pobres.

## Más allá de la emergencia

El desequilibrio territorial y la crisis alimentaria son mucho mayores que los señalados por los indicadores demográficos o de nivel de vida, ya que quedan integrados al problema otros aspectos, como la desigualdad; la concentración de la riqueza y la marginación; la pobreza; el deterioro ambiental; el desempleo, subempleo y trabajo informal; las adicciones; la inseguridad; la enfermedad; la falta de oportunidades; la desesperanza. No es de extrañar, por tanto, que la compleja problemática alimentaria y nutricional multiplique reclamos, denuncias y propuestas de distinta índole.

Es urgente actuar, pero una vez más pareciera que la preocupación por la crisis alimentaria lleva a enfrentarla pensando solo en lograr lo antes posible la seguridad alimentaria de la población. La experiencia reunida por el tratamiento de sucesivas emergencias alimentarias y nutricionales, la masividad de la malnutrición, la epi-

demia de enfermedades no transmisibles y la trama de relaciones económicas, sociales, ambientales, culturales, políticas y éticas de la actual crisis desafían a la sociedad a desarrollar líneas que consideren la situación de urgencia como el primer paso hacia una estrategia tendiente a generar alternativas sustentables.

El árbol no puede impedirnos ver el bosque y enfrentar las causas; la crisis alimentaria que se está atravesando debe posibilitar acuerdos sociales y una planificación a fin de poder decir nunca más a la pobreza, el hambre, la desnutrición y la malnutrición. Ello no será posible si no se pone la mirada en el largo plazo y se reconstruye la capacidad del Estado.

### **Medidas para atender la emergencia alimentaria (EA):**

Entre las propuestas públicamente conocidas para atender la EA en la actual crisis, agrupamos por su objetivo un conjunto de medidas; en algunos casos son propuestas aisladas, pero en otros forman parte de programas que incluyen a varias de ellas.

Asistencia directa: aprobar una Ley de Emergencia Alimentaria y Nutricional (existen varios proyectos que dieron lugar a diversos tipos de reclamos en los dos últimos años). Reforzar además los presupuestos del programa Políticas Alimentarias y los destinados a comedores y huertas. No estaría del todo clara la necesidad de implementar una Canasta Básica de Primera Infancia o incluso la actualización de los componentes de la actual Canasta o la formulación de una Canasta Básica Saludable.

Disminución de costos y precios: facilitar la incorporación de bioinsumos, semillas y plantas mejoradas y la producción agroecológica; eliminación de la intermediación no necesaria entre productores/elaboradores y consumidores, lo que implica generar y fortalecer canales alternativos; eliminación del IVA a los alimentos.

Promoción de la autoproducción de alimentos en pequeñas superficies, mediante programas urbanos y rurales en todos los niveles del Estado.

Incremento de los ingresos de los asalariados, pensionados y jubilados; generación de empleo.

Apoyo a la agricultura familiar: reglamentación y financiamiento presupuestario de la Ley de Agricultura Familiar a fin de avanzar en sus objetivos, compras públicas a organizaciones de la agricultura familiar. Constitución e implementación de una posible Ley de Góndolas, estableciendo que un porcentaje de la comercialización de alimentos en cadenas y supermercados sean de productores locales. Los agricultores familiares y la economía popular deberían complementarse con similares posibilidades en supermercados y autoservicios locales.

Algunas de esas propuestas propugnan la transición a la producción agroecológica, el fortalecimiento de diversos mecanismos de comercialización directa, la eliminación de intermediarios, asegurar mercados a la producción campesina y/o la agricultura familiar, pymes, organizaciones asociativas, etcétera.

Etiquetado frontal y didáctico de los alimentos, como parte de políticas públicas de información, educación y concientización que orienten cambios saludables en el consumo; implementación de campañas masivas de educación saludable.

Regulación y control de la publicidad de alimentos, especialmente los dirigidos a niños.

Fomento y apoyo a las organizaciones de consumidores solidarios, de defensa de los consumidores y de la economía social y popular que participan en la producción, elaboración, distribución y consumo solidario de alimentos.

En un país con más de 40 millones de habitantes en las ciudades, es fundamental que las organizaciones gremiales y los movimientos sociales urbanos dinamicen su preocupación por la alimentación ciudadana. Consideramos muy valiosas al respecto las contribuciones del Primer Foro Agrario Nacional y Popular, del Foro Federal de la Economía Autogestiva y Popular, y los Aportes para un Plan Nacional de Desarrollo de COOPERAR, al igual que las propuestas de los movimientos socia-

les. Los seis proyectos de Ley presentados por estos últimos deberían ser parte de la agenda a debatirse en el conjunto de la sociedad.

No obstante, el tema central sigue siendo cómo crear y sostener empleo de calidad en un mundo donde crece continuamente la población y también la automatización. Al respecto y atentos a la necesidad de ampliar el acceso a la alimentación saludable y al cuidado del medio ambiente se considerarán específicamente dos líneas de trabajo a mediano y largo plazo directamente relacionadas con la agricultura familiar y con los desequilibrios existentes en los territorios.

### **Políticas de mediano-largo plazo referidas a la agricultura familiar:**

El crítico análisis sobre la realidad nacional y agraria realizado hace dos meses por el Primer Foro Nacional, “Por un Programa Agrario Soberano y Popular”, definió una línea de acción –antes, durante y después de las próximas elecciones– que tiene que ver con el impulso de un programa que contemple la necesidad de una reforma agraria integral y popular. Esta bandera no es nueva en Argentina, pero debe referirse a un contexto muy particular. América Latina ofrece diversos ejemplos de revoluciones y reformas agrarias, algunas fueron impulsadas por la Alianza para el Progreso –y más recientemente, incluso, por el Banco Mundial– mientras que otras fueron llevadas a cabo por organizaciones y movimientos populares.

Pero en Argentina, donde nunca hubo procesos de esas características, ¿a qué tipo o tipos de reforma agraria nos estamos refiriendo ahora? ¿Cuáles deberían ser sus objetivos? ¿Qué aspectos debería abarcar su integralidad? ¿Quiénes deberían ser los actores responsables de su planeamiento y quiénes sus beneficiarios? ¿Queda restringida solo a agricultores familiares, campesinos e indígenas? ¿Abarca también la Ley de Agricultura Familiar? ¿Qué rol juegan los consumidores/ciudadanos en estos procesos?

El complejo debate en el que se debe profundizar no es ajeno al análisis integral del modelo hegemónico de producción agraria, sus causas, consecuencias y alternativas; tampoco es ajeno a la necesidad de dar respuesta al hacinamiento, la inseguridad, la desocupación, la pobreza, la falta de alimentos, el no acceso a una alimentación saludable y el desaliento. Al respecto, se considera que existen dos

temas en los que se puede ir avanzando para contribuir a clarificar los objetivos de la sociedad.

Por un lado, se debe hacer foco en el arraigo de quiénes todavía permanecen en la producción y las áreas rurales: no puede perderse ni un productor, ni un joven, ni un trabajador rural más; deben permanecer en las áreas rurales, pero no autoexplotándose o permitiendo su explotación, sino con dignidad y esperanza para generar y sostener alternativas y también para enseñar y compartir sus conocimientos. Hay mucho dicho y hecho al respecto y, tal como lo analizan y proponen Gandulfo y Rofman (2019), a través de “sistemas locales de producción y consumo de alimentos saludables” pueden promoverse distintos tipos de asociaciones entre productores y consumidores que fortalezcan tramas solidarias, más allá de las ventajas que de por sí proporciona la relación directa productor-consumidor o la promoción de canales cortos de abastecimiento. Las diversas situaciones existentes en los territorios seguramente generarán “sistemas locales” que contemplen sus particularidades. La problemática de las ciudades con menos de 100 mil habitantes, por ejemplo, es distinta de la de las grandes urbes, no en todas se dan los mismos procesos. Las grandes ciudades y su relación con el periurbano que las rodea también tienen sus propias características, como se hace evidente a través del proyecto de ley de “protección de cinturones verdes productivos” impulsado por el Movimiento de Trabajadores Excluidos-CTEP. El arraigo de los productores establecidos allí implicaría dar continuidad a la producción de productos frescos de calidad a menor precio y sostener una importante fuente de trabajo.

Por otra parte, la “Marcha al Campo”, una propuesta menos conocida pero en debate desde hace más de dos décadas, consiste en el traslado planificado y voluntario de grandes grupos de familias a un territorio rural próximo o distante, con el objetivo de poblar, facilitar el trabajo digno, el cuidado del ambiente, la producción y elaboración de alimentos saludables, el desarrollo local y regional. Esta propuesta trasciende la colonización tradicional, sino que se asocia en mayor medida con la “Reforma Agraria Integral” que promueven organizaciones y movimientos sociales, de la que bien podría ser un primer paso si se planteara con la escala y condiciones políticas y presupuestarias adecuadas. Implica una política de Estado, de largo plazo, ordenada a través de un Plan Nacional que requiere de la participación de

múltiples actores. Para algunos podría ser la añorada “vuelta al campo” del que fueron expulsados; pero será necesario también contemplar a otro tipo de interesados. A pesar de las menciones, son mínimas las reflexiones y propuestas desde las organizaciones sociales o la academia. El proyecto de ley “La Marcha al Campo” (Gallo Mendoza, 2019) puede ser un primer paso en ese aspecto.

## “Defender otro modelo agropecuario”

### Omar Príncipe

Agricultor familiar cooperativista de Villa Eloísa, Santa Fe. Ex presidente y secretario de la Federación Agraria Argentina (FAA). Ex presidente del Centro de Juventud Agraria de Villa Eloísa y presidente del Centro Primario de AFA-SCL de Villa Eloísa. Presidente de la Cooperativa de Carnes Alternativas Federadas y director titular del Distrito VI de la FAA (Centro y Sur de Santa Fe).

**B**uenas tardes a todas y todos. Quiero agradecer, en el nombre de Carlos, a toda la Cátedra por la invitación; a Guido, que me está acompañando, y a todo el panel. La verdad es que es un orgullo venir a participar de estas Jornadas y no es para nada un esfuerzo, como decía Carlos, sino que venimos a nutrirnos aquí. En mi caso, es doble el orgullo y el honor de estar acá porque también para mí, como dirigente agrario y del movimiento cooperativo, es un momento que me da la Cátedra para hacer visible que en el sector agropecuario “parece que está todo bien” y la verdad es que sabemos que no es así.

En otras oportunidades tuve la posibilidad de venir a hablar a otra de las Jornadas que hizo la Cátedra como presidente de la Federación Agraria Argentina y podía, de alguna forma, plantear la discusión, el debate, la denuncia y la propuesta institucional de la Federación Agraria Argentina. En este caso, lo hago como dirigente de base, del movimiento cooperativo, estamos haciendo un esfuerzo enorme para hacer visible lo que no hace visible la conducción de la Federación Agraria Argentina, que no es un problema interno de distintas visiones, sino que con estas Jornadas se pone de manifiesto que cuando no hay una entidad que representa los intereses de la agricultura familiar, de los pequeños y medianos productores que hacen visible el mapa agropecuario de la Argentina, cuando no denuncia la concentración y que el modelo agrario se está llevando puestos a miles de chacareros y agricultores familiares, espacios como la Jornada de hoy son importantes.



No puedo salir de la coyuntura: hace horas se conoció por los medios que el presidente de la Nación va a enviar un decreto de necesidad y urgencia para promulgar la Ley de Semillas. El Foro de Agricultura Familiar y las entidades de base salimos a oponernos y a denunciar este mecanismo, con el silencio cómplice de algunas entidades que sabemos que están muy contentas y que operan para que salga el decreto. El silencio y la complicidad de la Federación Agraria Argentina son dolorosos para nosotros.

Aprovecho esta jornada para hacer visible esto que los panelistas que me antecedieron y el panel anterior han planteado claramente. Hay algo que se repite en lo que estábamos hablando, que tiene que ver con la necesidad de cambiar el modelo agrario de Argentina. Esto lo ha planteado de forma brillante Carlos, no solo con el diagnóstico sino también con la propuesta. Este modelo viene siendo de una concentración feroz de la producción y de las cadenas, se está consolidando y nos quieren hacer creer que es el que tiene que tener la Argentina para los próximos años. Por eso, es muy importante la unificación de las distintas organizaciones y de los ámbitos de debate, de las universidades, y también plantear la unificación de criterios y propuestas para poder hacer frente a esta situación.

Hay algo que han logrado instalar: la idea de que el campo es todo lo mismo. Cuando se habla de la industria, todos hablan de los subsidios que necesitan las pymes industriales para poder ser sustentables. Esto también pasa con el comercio: las pymes comerciales necesitan también una política pública distinta e incluso hay organizaciones que han hecho visibles las distintas problemáticas y sus propuestas. Pero cuando hablamos del campo, se lo ve como el gran ganador de los últimos años y todos nos referimos a ese famoso “sector agropecuario” que es el más pujante de la Argentina, el que crea divisas. “El campo es el que genera mano de obra y no hay que ‘ponerle el pie encima’ porque es el que puede salvar al país con una cosecha”, esto es lo que se dice y podemos seguir enumerando distintas frases que nos engloban como un sector homogéneo. En realidad, cuando dicen eso, se basan en los números macroeconómicos y pasamos entonces a festejar que la Argentina produce este año 147 millones de toneladas de grano, lo que representa el verdadero éxito de ese modelo, no solo por la producción sino porque de esa forma nos “insertamos” en el mundo, lo cual hace posible que ingresen y se liquiden divisas

en el país y que a partir de ahí se pueda hablar de ese famoso “crecimiento de la torta” que en algún momento se va a repartir entre los distintos sectores sociales.

Hoy los números indican, como decía Carlos, que la Argentina produce más de 140 millones de toneladas, pero tenemos los índices de pobreza e indigencia más altos de los últimos años. El 50% de nuestros chicos está en la pobreza, y mientras nosotros estamos acá, los movimientos sociales están movilizándolo a miles y miles de argentinos que piden por una Ley de Emergencia Alimentaria. No hay forma de esquivar y de no ver que este modelo agrario, que para algunos es exitoso, esconde un fracaso enorme y también esconde que es un modelo de exclusión social, no solo de pequeños y medianos agricultores sino de casi la mitad de la sociedad argentina.

¿Cómo llegamos a producir casi 150 millones de toneladas de granos con lo que ha pasado en los últimos años? Tuvimos una inflación de un 50% interanual, y a su vez lo que más aumentaron fueron los alimentos. Entre un mes y el otro parece que hubiera pasado un siglo, pero en ese año que la inflación general fue del 50%, los alimentos crecieron un 64%. No sé este mes de cuánto va a ser, pero lo que más aumenta son los alimentos, con cuatro años de una Argentina con sus insumos agropecuarios totalmente dolarizados: todos los fertilizantes y los demás insumos que usamos los agricultores están dolarizados. Uno de los más importantes es el gasoil. El libre mercado permite que nosotros exportemos, pero la importación de alimentos, como se decía en el panel anterior, ha inundado de alimentos y de manufacturas, con un impacto enorme sobre todas las economías regionales del país, con una *timba* financiera que es el verdadero negocio de pocos y que lleva las tasas de interés a niveles exorbitantes de un 70%. Pero cuando los productores agropecuarios o los agricultores familiares vamos al sistema financiero, las tasas son del 100%, lo que hace inviable cualquier modelo productivo en la Argentina.

Entonces, nos preguntamos: ¿cómo puede ser que con este panorama que se vive en la Argentina el campo esté produciendo casi 150 millones de toneladas de granos? Allí es donde tenemos que hacer visible quiénes son los que ganan con esa producción en la Argentina y quiénes vamos perdiendo con este exterminio (uso esta palabra porque es lo que está pasando con muchos pequeños y medianos agri-

cultores familiares en nuestro país). Esto está clarísimo y sustentado con muchos datos. Carlos indicaba uno de estos datos, el de los censos oficiales que van marcando que en 2002 había 320.000 productores, con una tendencia decreciente desde entonces. Esa concentración de los agricultores siguió y en 2018 supimos que hubo más de 80.000 productores menos, con una cifra de 237.000 productores. La concentración de números sigue avanzando, pero hay otra que es menos visible. Hay agricultores que todavía figuran en las cifras. En la Pampa húmeda, donde se siembra trigo, maíz y soja, se está dando un fenómeno en estos últimos años: hay agricultores que no venden el campo, es decir, que siguen teniendo las cincuenta o cien hectáreas, pero se convirtieron en rentistas, siguen figurando como agricultores, pero resultan ser víctimas de este modelo de concentración porque ya no pueden seguir adelante con el paquete tecnológico que les impone el modelo. Los agricultores alquilan el campo a un *pool* de siembra o a otro productor más grande y se convierten en rentistas que siguen teniendo su propiedad pero ya no trabajan más el campo. Esto va generando cada vez más este desierto del que hablaba Carlos: cada vez tenemos menos agricultores y la expansión se da en cultivos de extensión.

Quiero ofrecerles algunas cifras, porque esa desaparición no es solo del agricultor, sino de todo el sistema de producción de insumos, de financiamiento, de cooperativas, que va también concentrándose. Un pequeño productor, cuando ya no tiene acceso al financiamiento, no es sujeto de crédito. No puede ir al banco para sacar un crédito para comprar fertilizantes. La que nos financia es la cooperativa, pero la cooperativa no tiene más espalda como para apoyarnos. Ahí nosotros, al no tener financiamiento y enfrentar la competencia de los grandes grupos, nos debilitamos y perdemos la capacidad de comercialización y de producción desde la cooperativa. Cuando un productor alquila sus cincuenta hectáreas a un *pool* de siembra, esa comercialización ya no pasa por la cooperativa, sino que va directamente a Cargill, y el financiamiento de ese *pool* de siembra lo hace el banco.

El banco privado dice: “Yo te voy a prestar para que vos siembres las cincuenta hectáreas, pero vos tenés que comercializar por el banco, porque el banco tiene un sistema de comercialización directa con Cargill”. Así, el pueblo desaparece: la comercialización, todo lo que pasaría con la gente que trabaja en el acopio privado del pueblo, de la cooperativa, toda esa cadena de trabajo y de valor agregado. Hace

cinco años, el movimiento cooperativo había llegado al 9,5% del total de exportaciones de granos en la Argentina. El dato de hace dos o tres meses que cité antes dice que el movimiento cooperativo tiene hoy el 4,5% de ese total, o sea que hemos retrocedido cinco puntos, y por supuesto que la concentración de esa exportación se reparte entre cuatro o cinco empresas: Bunge, Cargill, Vicentin y alguna otra. La concentración que vemos no solo se da en la exportación sino en todo lo que queda, que son los productores que trabajamos para el mercado interno. El exterminio que se ha hecho de productores lecheros y tamberos en estos últimos años es terrible. Leía que hay 9.500 tambos en la actualidad y que hace una década eran 17.000. De esos 9.500 tambos, 6.500 producen la misma cantidad de leche que otros 355. Hay 355 tambos en la Argentina que producen lo mismo que 6.500. Esto muestra la concentración que hay a todos los niveles.

Cuando digo que quieren consolidar el modelo agropecuario, podría dar muchísimos ejemplos, pero voy a dar solo tres. Uno es el del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, que se defiende con el argumento de que vamos a competir en un mercado de 400 millones de personas. El segundo ejemplo es el de la visión de los funcionarios del gobierno actual. Quiero leer un tuit de un funcionario del Ministerio de Agroindustria, que es uno de los responsables del cambio rural en la Argentina. Es un tuit de hace unos días, cuando se conocía la noticia de que la Argentina había alcanzado el récord de producción de granos. Dice lo siguiente: “La insensatez de la reforma agraria. Cambiar la estructura de propiedad de la tierra tenía sentido en países con un agro muy atrasado. En Argentina, el campo es el sector más dinámico. 2019: Récord de producción. Habría que reclamar reforma industrial más que reforma agraria”. Éste es un tuit de un funcionario de Agroindustria del gobierno actual.

El tercer ejemplo es una nota del diario *La Nación* del 25 de agosto de 2019 que habla de la sustentabilidad del modelo agropecuario de las grandes empresas y nombra a Los Grobo, con 187.000 hectáreas y toda la cadena de producción, que llegan hasta el producto que se vende en el supermercado. Adecoagro tiene 258.000 hectáreas de soja y maíz más 40.000 hectáreas de trigo. Veo estos números y lo comparo con mi pueblo: todo el distrito son 36.000 hectáreas, donde vivimos 3.000 argentinos. Son diez pueblos como el mío manejados por una sola empresa.

Adecoagro tiene además un tambo de última generación en Venado Tuerto, con 10.000 vacas. También está Managro, con 60.000 hectáreas de maíz y de soja. El desafío es cómo consolidar y hacer sustentable la recuperación de carbono, las buenas prácticas agrícolas.

Por eso, y solamente a título de planteo, nuestro desafío es no solo sobre propuestas de políticas públicas, sino también ganar en la opinión pública la idea de que el modelo agrario es un modelo de exclusión y concentración, que nos va a llevar a una Argentina realmente desierta en todo el interior. Para tratar de cerrar, creo que hay que tener propuestas a corto, mediano y largo plazo. Creo que dentro de esas propuestas tiene que haber un cambio o una mejora en el régimen impositivo, que tiene que estar basado en el principio de proporcionalidad y de progresividad, especialmente en el Impuesto a las Ganancias, el IVA y la segmentación de las retenciones. Es fundamental el planteo de políticas segmentadas y diferenciadas, porque sí creemos que las retenciones pueden ser una herramienta con la que el Estado puede establecer un equilibrio en el tema de los cultivos extensivos. Respecto del impuesto a los cheques y a las Ganancias, junto con la coparticipación de las provincias, hay mucho para trabajar.

Otro tema sería el de facilitar los procesos de transformación y comercialización. No quiero abundar en eso porque lo han planteado anteriormente, pero es estratégico incorporar al movimiento cooperativo como herramienta para los pequeños y medianos productores, con la creación de mercados centrales, regionales, territoriales, que permitan que el productor llegue al consumidor en forma directa y la creación de todo lo que significa valor agregado de origen regional como parte de esto. También, apoyar la competitividad de los pequeños y medianos productores con una serie de políticas de financiamiento que tengan que ver con el ciclo productivo, la compra pública y el precio mínimo sostén para las economías regionales; ampliar y mejorar la Ley de Emergencia Agropecuaria, reglamentar y fondear la Ley de Agricultura Familiar. Se ha mencionado el tema de la Junta Nacional de Granos: la Federación Agraria Argentina tiene presentado un proyecto de creación de una Agencia Federal de Estímulo a la Producción Agropecuaria, como una forma de intervenir y establecer un equilibrio dentro de este tema; también, promover

un modelo sustentable, basado en la agroecología como centro de un modelo agropecuario distinto.

Respecto de los proyectos para trabajar en el Congreso de la Nación, creo que la Ley de Contratos Agrarios es indispensable en este momento para salir de los contratos accidentales, para pensar en el largo plazo, no solamente para hablar de las buenas prácticas sino para poner un límite a los grandes grupos que trabajan miles y miles de hectáreas; una Ley Nacional de Tierras, con un Instituto Nacional de Tierras, a contramano de lo que ha hecho este gobierno, que ha rematado las tierras para que alguna inmobiliaria o algunos amigos hagan sus negocios.

Como dije antes, sobre la Ley de Semillas, debe permitirse el uso gratuito de los productores, que sea de orden público, como un gran banco. También hay que discutir una Ley Nacional de Producción Lechera, de porcinos y vacunos, con foco en la alimentación saludable y en los pequeños y medianos productores.

Para cerrar, porque creo que me excedí en el tiempo –y también en el peso-, creo que más allá de estas propuestas concretas, tenemos que defender un modelo agropecuario que contemple qué alimentos producimos, en qué lugar los producimos y quiénes los producen. En definitiva, no solo tenemos que esforzarnos para que nuestra producción sea rentable y sustentable, que los agricultores podamos vivir de esa producción, sino también volver a recuperar la identidad; cuando producimos un alimento, ese alimento nos debe identificar como localidad, como familia, por los saberes de nuestros antepasados y del conjunto de esa región. Yo he viajado a Europa cuando estaba en la Federación Agraria, uno va a una región y come el queso o el aceite de oliva, o toma la cerveza o el vino de esa región, con el orgullo de quienes los producen. A 100 kilómetros de ahí se come el queso de otra región, y eso no significa una competencia entre ellos, sino valorar la identidad propia. Creo que el modelo agrario tendría que estar basado en la diversificación productiva agroecológica, que vuelva a contemplar al pequeño y mediano agricultor. Muchas gracias.

## La disputa por el sentido

**Nahuel Levaggi**

Coordinador nacional de la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT) y referente del Foro Agrario Nacional.

**G**racias por la invitación a todos los compañeros y compañeras. La mayoría de las cosas ya fueron dichas y por eso vamos a tratar de aportar algo que no haya sido dicho, como para darle una vuelta de tuerca a todo esto y tomar un par de cosas de la mesa anterior, que me pareció sumamente interesante.

En realidad, en todo esto, como lo dijo Omar en un momento, hay una disputa de sentido en lo general, cuando nosotros y nosotras hablamos de la “unidad del campo”. Eso es lo primero que tenemos que meternos en la cabeza, porque si hablamos de cómo disputar el sentido común es para generar una correlación de fuerzas que nos permita transformar la realidad que estamos viviendo porque si no vamos a seguir haciendo encuentros para hablarnos a nosotros mismos, donde todos estamos de acuerdo, pero las cosas van a seguir como están. Si construimos un pensamiento crítico es para que las cosas cambien. Aquí hay un elemento fundamental: los actores sociales que vamos a hacer que eso cambie, y para eso tenemos que ganar las cabezas, empezando por las nuestras.

Retomo algo que dijo Carlos en el panel anterior sobre esta contradicción entre la gran cantidad de alimentos que produce la Argentina y el hambre que hay. Ahí tenemos una falacia porque lo que se produce no son alimentos sino materia prima que se exporta. No hay ningún tipo de política pública referida a la producción de alimentos, esa es la primera disputa por el sentido que tenemos que dar. Nosotros y nosotras, cuando armamos el Foro por un Programa Agrario Soberano y Popular, básicamente, nuestro postulado primario fue pensar de qué manera garantizamos alimentos sanos a precio justo para el pueblo. Esa es la primera disputa por el sentido que tenemos que dar, así ponemos algo sobre la mesa que nos incluye a todos

y todas. Cuando salimos al espacio público y hacemos los “verdurazos” y los “feriazos”, el éxito de esa medida tiene que ver con que nuestra acción de protesta es para resolverle un problema al que está al lado. Así nos ganamos a esos vecinos y vecinas y por otro lado ponemos sobre la mesa el problema general. En la Argentina nunca se ha discutido un programa alimentario. Nunca hemos tenido una política pública que discutiera quién produce los alimentos, cómo se los produce y para quién se los produce.

Ahora tenemos las elecciones del 27 de octubre. Ya pasaron las PASO, viene un nuevo gobierno, pero no hay una discusión sobre esto, cuando todos sabemos que es el principal problema. Si hablamos con la dirigencia política que va a asumir el gobierno nos dice que el principal problema son los alimentos, pero no hay un debate público. Los alimentos salen de la tierra, de la producción agropecuaria. El Ministerio de Agroindustria se construyó desde el primer momento para una corporación, la del “campo rico”. Es uno de los únicos ministerios construidos para una corporación. Cuando pensamos en una política pública, en cómo está estructurado el Estado, generalmente pensamos en políticas totalizadoras que den respuesta a una necesidad general de la población: esta estructura genera condiciones para que el agronegocio maximice sus ganancias. En todo caso, ordena y controla un poquito esa corporación, (pero) en ningún momento está en función de algo totalizador.

¿Se entiende lo que planteo? Nosotros y nosotras seguimos pensando con un esquema sectorizado, donde planteamos algo tan esencial como lo de los alimentos y no hay ninguna estructura del Estado que diga cómo se producen alimentos sanos y a precios accesibles para el pueblo. Hoy no la tenemos. Hay, a lo sumo, cosas sueltas y en todo caso, desde el sector de los pequeños productores, nosotros levantamos la mano y decimos que somos los que producimos los alimentos, pero tenemos los pueblos fumigados y nos están matando. Los consumidores dicen que no pueden pagar, y frente a eso lo que hace el Estado, básicamente, es comprar alimentos de pésima calidad y entregar bolsones a los más pobres y, por otro lado, hay un sector al que el gobierno anterior había levantado un poco y éste lo destruyó, pero no tenemos una política estructural para el sector. A lo sumo, se discute la cuestión de la salud de los pueblos fumigados, pero no hay que separar la producción de la



cuestión de la salud, y el futuro presidente lo aclaró después de que se conoció el fallo sobre lo que pasó en Entre Ríos. Tenemos las mentes colonizadas, un ejemplo de eso es el planteo de que “el campo es uno solo”, es decir, que hay un solo modelo de producción de alimentos, básicamente porque no se cuestiona la producción de alimentos y, a lo sumo, se habla de la generación de divisas.

Cuando nosotros planteamos el modelo de producción de alimentos nos contestan: “Y... pero el campo tiene que producir divisas”. Y sí, ¿quién está diciendo que no hay que hacer eso también? El tema no es hacer eso solamente para beneficiar a Monsanto-Bayer. Todos los productores que están afiliados a las entidades que le hacen el juego a ese modelo saben que hay una cuestión corporativa, de identidad, como si uno estuviera en contra, lo cual es un logro muy fuerte de esas entidades que se han constituido como una corporación cerrada, sin grietas en su interior –más allá de lo que venía expresando Omar–, pero no hay fisuras en el planteo del modelo. Ahí tenemos el ejemplo de lo que pasó con la 125, donde el peón hacía el corte de ruta para defender las ganancias del patrón, mientras al costado tiraban la leche en la zanja.

Lo que nosotros tenemos que plantear es que no existe una disyuntiva entre producción y no producción, ni hay una cuestión de ataque a un individuo. Acá la discusión es sobre el modelo concentrado de agronegocios, del cual el productor, incluso el que está en la Mesa de Enlace, también es víctima. Porque, como decía Omar, la mayor cantidad de los productores que integran las entidades que defienden a rajatabla este modelo son víctimas y también están desapareciendo. Por eso digo que es una disputa por el sentido, porque si no ¿cómo podemos explicar que la actual conducción de la Federación Agraria esté a favor de sus propios verdugos, los de su base social?

Voy a poner otros ejemplos y después voy a detenerme en algunas cuestiones un poco más concretas. Alguien me preguntó por qué este gobierno había sacado el monotributo social agropecuario, un impuesto de costo cero que le garantizaba al pequeño productor la obra social y el aporte jubilatorio. No fue un problema de plata sino un problema de concepción de clase: “¿por qué te tengo que pagar el mo-

notributo si yo me pago lo mío?”. Esa fue la discusión con el subsecretario de Agricultura, Santiago Hardie.

Acá hay una disputa plena por el sentido. La mejor herramienta que tenemos para dar esa disputa es el alimento, porque es lo que nos une a todos los que estamos acá y los que están afuera. Ha habido un avance enorme de esa discusión en estos últimos tiempos, como dijo Carlos, con el tema de exponerlo crudamente. Cuando nosotros nos paramos en Plaza de Mayo y regalamos verdura, eso es un avance tremendo en la discusión, pero porque tenemos el poder de los alimentos, que es uno de los mayores que tenemos. De hecho, es el mayor poder que tienen las multinacionales. Bayer-Monsanto lo tienen porque incluso en muchos de los alimentos que producimos nosotros dependemos de ellos. Nosotros y nosotras, esta noche, dependemos de Bayer y Monsanto para comer, porque la dolarización de los insumos para la producción nos afecta siempre.

Si hay algo que no modificaron el gobierno anterior y el actual y los que los precedieron, fue ese modelo de producción agropecuaria, y por ende el de producción de alimentos. Sí, en todo caso, hubo algunas políticas compensatorias, más de asistencia, pero el modelo, desde 1492 hasta la fecha, es exactamente el mismo y se ha profundizado cada vez más la concentración. La matriz productiva, la de la tenencia de la tierra, la de la comercialización, fue la misma a lo largo del tiempo y lo que se ha dado es una profundización de esta concentración, que es lo que antes explicaba Omar. Esa concentración de la matriz productiva y de la de comercialización, y de ese consumo atomizado e idiota que todos y todas tenemos en la cabeza, hace que ese modelo sea exitoso y que hoy no se discuta la producción de alimentos. Estamos por cambiar el gobierno y no se pone sobre la mesa quién produce los alimentos, cómo los produce, parece que no es un tema para discutir porque es “piantavotos” y porque ni siquiera está ganada la clase dirigente que se ha puesto a pensarlo. No hay una estructura del Estado que piense la alimentación en la Argentina. Yo soy gobierno dentro de mi organización, la Unión de Trabajadores de la Tierra. Cuando todos los compañeros y compañeras nos sentamos, pensamos qué es lo importante y lo que vemos importante lo jerarquizamos y le dedicamos militancia, recursos y trabajo. Evidentemente, si en el Estado argentino no hay una instancia que piense en la alimentación, hay como una orejera que no nos permite escuchar.

En lo que sí ha habido un avance es en que el sector está en un proceso de disputa de sentido que nos incluye a nosotros y nosotras. Una de las cuestiones que empezamos a pensar hace un tiempo es esta idea de que el campo es uno solo, que es una de las consecuencias mayores de la 125. Por eso hay que salir a mostrar “el otro campo”, eso fue lo que hicimos todos estos años. El año pasado, cuando se inauguraba la exposición de la Sociedad Rural, hicimos un tractorazo en la puerta mostrando ese “otro campo”. Este año hicimos algo parecido con el “alimentazo” en Plaza de Mayo, pero también nos empezamos a preguntar por qué somos *el otro campo* cuando somos los que producimos alimentos. Y por qué hablamos de “economías regionales”: ¿acaso la soja no es un producto “regional”? ¿O en Chubut o Tierra del Fuego se produce soja?

Si seguimos hablando en esos términos es porque tenemos la cabeza ganada por una matriz productiva y un esquema de producción agropecuaria de la oligarquía. Nosotros seguimos reproduciendo eso constantemente. En un momento determinado es importante identificarnos y decir: “Yo sí existo” o “Somos el otro campo”. El paso siguiente es que nos preguntemos: “¿Por qué *el otro campo*?”. Tendríamos que decir, en cambio, “somos *el campo*”. ¿Por qué ellos tienen un ministerio y nosotros una secretaría? Ese es un debate que no tiene que ser sectorial y corporativo, porque si no deberíamos preguntarnos por qué son más importantes los intereses de ellos que los nuestros. Nosotros, al hablar de todo esto, estamos pensando en el bien común y por eso es tan importante profundizar el debate y hablar de los alimentos y no centrarnos en la problemática del pequeño productor. Cuando hablamos de nuestros problemas estamos hablando de los tuyos también. Si mañana desaparecen todos los pequeños productores, pasado mañana la Argentina se queda sin verdura. Ahí hay una cuestión de sentido, de comunicación y de romper esos cercos, porque si ahora tenemos una campaña presidencial y en ningún momento está sobre la mesa la problemática de la producción de alimentos o el modelo agropecuario, hay un consenso general para que se diga: “muchachos y muchachas, de eso no se habla”. Pero si hablamos de la cantidad de productores a los que representan las entidades de la Mesa de Enlace y los que representamos en la Unión de Productores Familiares, ahí vamos a ver quiénes son más. Pero del otro lado están las divisas y el Producto Bruto Interno y eso solamente se contrapone con decisión política fuerte. Esa decisión política fuerte se logra con una

fuerza social organizada, rompiendo esa “orejera” en la disputa por el sentido. La mayor tarea que tenemos hoy nosotros y nosotras es instalar el problema y que el conjunto de la sociedad entienda que los miles y miles que estábamos hoy –yo también estaba– reclamando la emergencia alimentaria, no significa que eso se resuelve con más bolsones que vengan de Desarrollo Social. Nosotros tenemos que democratizar la matriz productiva: tenemos que multiplicar y cuidar los tambos y las agroindustrias locales, no puede pasar que haya que traer un litro de leche desde 400 kilómetros para poder consumirlo. Hay un montón de medidas y de propuestas concretas y realizables con decisión política que permitirían resolver el problema de miles y miles. Pero tenemos una dirigencia política muy enfrascada en repetir las mismas acciones. Parece que para hablar de los problemas del campo hay que empezar por las retenciones. Cuesta hacer entender que el verdadero problema no es el de las retenciones sino el de lograr poner la comida en la mesa. De esto hay que empezar a hablar cuando planteamos nuestros problemas. No estoy diciendo que no haya que hablar de las retenciones, pero primero hay que hablar de esto.

El Foro por un Programa Agrario Soberano y Popular se propuso dar un paso proveniente de aquellos que producimos los alimentos, que no se limite a presentar una lista de indicaciones, porque después sucede que se genera una mirada de compasión hacia nosotros, los pequeños productores, y eso nos pone en un lugar cómodo, que es el de pensar nuestras reivindicaciones. Cuando se da esa situación y vamos con nuestra lista, nos escuchan y nos dicen: “bueno, te armo una mesita, así empezás a jugar con tus cositas”, pero después van a sentarse con la Mesa de Enlace para decidir las políticas. Si nosotros planteamos otro modelo, no podemos empezar por hablar de los problemas de la agricultura familiar. Tenemos que plantear otro modelo, integralmente. Eso fue lo que hicimos con el Foro: construimos una propuesta integral de otro modelo agropecuario, entre la necesidad concreta e inmediata y la gran consigna de la soberanía alimentaria o la reforma agraria, que nos pone contentos cuando lo decimos y nos enorgullece cuando nos miramos al espejo, pero después todo sigue como estaba. Si realmente nosotros y nosotras queremos transformar esta realidad, hay que hacer cosas que sirvan y no las que nos dejen contentos, porque de un lado hay un sector que está desapareciendo y

que la pasa mal en el campo, y en la ciudad hay gente que tiene hambre. ¿Qué hacemos con respecto a eso?

Desde el lugar que nosotros ocupamos nos propusimos dar un paso. Esa fue la tarea del Foro y eso es lo que hoy estamos impulsando, instalando y fortaleciendo. El crecimiento que hemos tenido ha sido enorme, pero nada es de la noche a la mañana y esos pasos hay que darlos. Incluso en la exposición de Mercedes se vio que el conjunto es mucho más grande. Nosotros estamos multiplicando las hectáreas en producción totalmente agroecológica, además de que esto es sano, nos permite dar de comer a nuestros compañeros y también nos hace ganar más plata, porque nuestros insumos no están dolarizados. Muchas gracias.

# Circuitos cortos de producción, comercialización y consumo en la Agricultura Familiar y la Economía Social, Popular y Solidaria: tipología y propuestas de políticas

## Mercedes Caracciolo

Licenciada en Sociología, especialista en Desarrollo Rural y en Economía Social y Solidaria. Integrante de la Asociación Lola Mora y del Centro de Estudios y Formación de la Cooperativa de Consumo La Yumba. Miembro fundadora y honoraria del Foro de Universidades y Agricultura Familiar y del Consejo Asesor de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Agricultura Familiar del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (IPAF-INTA) de la Región Pampeana.

## Presentación

Voy a referirme a los circuitos cortos de comercialización en Argentina, limitándome a aquellos que forman parte del mundo, por ahora pequeño, de la agricultura familiar, campesina e indígena y de la economía social, popular y solidaria (en adelante AF y ESPyS). Mi objetivo es presentar una tipología de espacios comerciales alternativos a través de los cuales este sector canaliza sus productos, analizando algunos temas que me parecen relevantes para comprender sus alcances y sus desafíos y poniendo el foco principalmente en la relación con uno de sus actores: las y los consumidores. Para terminar, voy a plantear algunos lineamientos de políticas (hacia adentro de las organizaciones y públicas) que contribuyan para que lo alternativo deje de serlo y pueda llegar a ser una nueva institucionalidad orientada al abastecimiento con una perspectiva de soberanía alimentaria.

## Marco teórico-metodológico

Esta presentación se inscribe dentro de los marcos teóricos de la economía social o popular en transición o búsqueda de formas solidarias; es decir, se vincula

con aquellos enfoques que valorizan el trabajo de los que viven de su trabajo, sean actividades unipersonales, familiares o asociativas; que bregan por una economía que pueda resolver las necesidades legítimas de todos sus habitantes cuidando a un tiempo el medio natural que sustenta esas necesidades para avanzar hacia la reproducción ampliada de la vida (Coraggio, 2010). Asimismo, asumo la teoría de Bourdieu (2001) que sostiene que la posición de los agentes en los diferentes campos en los que actúan se define según el volumen y la estructura de los capitales que poseen (económico, el más importante para el autor, social, cultural, simbólico y político). Algunos de sus conceptos los tomo para proponer la construcción de tramas de valor en la economía social, popular y solidaria (Caracciolo, 2014). Así, podemos comprender que los mercados son un campo en el que juegan actores con diferentes capitales y que de las relaciones entre ellos surgirán determinadas reglas que favorecerán más a unos que a otros. Por otra parte, para abordar la comprensión de los mercados me baso en Melo de Lisboa (2004), quien sostiene que los mercados funcionan desde la antigüedad y que son construcciones políticas que reflejan en cada momento correlaciones de fuerza y no el resultado del libre juego de la oferta y la demanda guiado por una mano invisible. Para Melo de Lisboa es necesario diferenciar una sociedad de mercado como la actual, que pretende autorregularse, de una sociedad con mercados que constituyen espacios necesarios para el intercambio de productos.

El sistema agroalimentario atraviesa desde hace años un proceso de concentración económica en cada uno de sus eslabones (producción, industrialización, distribución y consumo), al ritmo de los vaivenes de los ciclos de acumulación de capital de la economía mundial. Se consolida de este modo un esquema de corporaciones multinacionales con capacidad de imponer condiciones en las economías domésticas acerca de quién produce, qué y cómo se industrializa, cómo se distribuye y, en definitiva, qué alimentos consume la población (Soler Montiel, 2007). Asimismo, con la capacidad de apropiarse del valor generado por buena parte de los agricultores familiares y de otros actores de la economía social y popular y de las pymes. Coyunturalmente, el sector se ve muy afectado por las políticas de este gobierno: particularmente, por los tarifazos, la dolarización de los insumos y la caída de la capacidad de consumo de la población. En los periurbanos, vemos crecientemente afectada la tenencia de la tierra por la presión de desarrolladores inmobiliarios.

En lo metodológico, recurrí a estudios basados en encuestas a integrantes de diversos espacios comerciales realizadas por varias instituciones y tesis, así como a mi propia observación participante y no participante luego de muchos años de actuación en el sector y de tres años como integrante de la Cooperativa de Consumo La Yumba.

¿A qué llamamos, entonces, espacios, canales o mercados alternativos de comercialización? “A aquellos espacios que escapan a la lógica del capital, consistente en maximizar una tasa de ganancia sobre el capital invertido –mercados convencionales– y buscan la satisfacción de las necesidades de las y los actores que participan en intercambios principalmente comerciales aun cuando las experiencias existentes evidencian que también se realizan intercambios sociales, culturales y políticos” (Alcoba, Dumrauf et al., 2011). “Se hacen amigas y amigos, aprenden otras formas de ser mujer –me decía una feriante–, se politizan, pelean por el espacio, etcétera”.

Algunos antecedentes empíricos de este trabajo se ubican en 2012<sup>1</sup>, en relación con el INTA, y en 2017, como parte del Observatorio de la Comercialización de la Agricultura Familiar del Foro de Universidades y Agricultura Familiar de la Región Pampeana.

En un trabajo muy reciente editado por INTA (2019)<sup>2</sup> en el Marco del Proyecto Mercados y Estrategias Comerciales<sup>3</sup> utilizamos como criterio principal clasifica-

---

<sup>1</sup> Ya en 2012, en el Programa en Economía Solidaria de la Universidad de San Martín (UNSAM) junto con el IPAF Pampeano y el Pro-Huerta del INTA y la Secretaría de Agricultura Familiar (Caracciolo, Dumrauf, Moricz et al., 2012), identificamos y caracterizamos seis modalidades alternativas de comercialización de la AF respecto de las convencionales, sin intermediarios o con mínima intermediación: 1) ferias del productor al consumidor, 2) compra pública, 3) relación directa productor-consumidor con gestión estatal, 4) comercializadoras de intermediación solidaria (CIS), 5) cooperativas mayoristas o federaciones de cooperativas, 6) cooperativas de comercialización de agricultores familiares (Caracciolo et al., 2012).

<sup>2</sup> En 2019, se realizó un Proyecto Específico del INTA coordinado por Sergio Dumrauf.

<sup>3</sup> En 2017, en el marco del Foro de Universidades y Agricultura Familiar, elaboramos un proyecto de Observatorio de la Comercialización de la Agricultura Familiar en donde nos propusimos analizar las dimensiones que diferencian a unos espacios de otros, entre otras cuestiones.



torio de los espacios comerciales al tipo de actor encargado de organizar y decidir en cada uno y a los actores con los que se relaciona. Así, planteamos cuatro tipos: productores, consumidores, intermediación solidaria y Estado. Es decir, en principio, dejando de lado la modalidad feria, bolsón de verduras, comercio minorista o mayorista, etcétera; y también dejando de lado la forma jurídica porque no serían variables determinantes como la señalada antes. Esta tipología es la que voy a profundizar hoy.

### **Contextualización de los espacios comerciales alternativos de la Agricultura Familiar y la Economía Social, Popular y Solidaria**

El origen de la mayoría de las experiencias de circuitos cortos que voy a comentar se relaciona con movimientos sociales agrarios (la feria franca de Oberá, en 1995, se convirtió en todo un hito), campesinos, asambleas barriales, de desocupados u otros que pelean por generar o mejorar sus ingresos, escapar a la intermediación parasitaria, vender sus productos en forma directa a los consumidores, encarar una actividad económica en el marco de la economía social o popular o comprarle a esta economía. Primero, en el NEA (noreste argentino); y luego de la crisis de 2001, en todo el país. Las Ferias de la AF y de la ESSyP parece que vinieron para quedarse.

Actualmente, solo un porcentaje reducido de la producción de alimentos frescos y/o procesados provenientes de la agricultura familiar pasa por estos canales alternativos. El grueso de la producción, sobre todo de frutas y hortalizas, se canaliza por los mercados convencionales. Sin embargo, el dato de la existencia en el país de unos 800 puntos de venta en ferias, mercados sociales o populares, cooperativas, comercializadoras, etcétera, según sostienen informantes calificados, da cuenta de un crecimiento importante si lo comparamos con alrededor de 140 ferias que relevó un estudio también del INTA, en 2009. Los circuitos cortos vienen creciendo.

Existe un segmento de consumidores que se siente atraído por estos productos y comercios alternativos. Las motivaciones prioritarias, aunque para nada exclusivas, no parecen económicas y tienen más que ver con razones políticas de apoyo a otra economía, a la agricultura familiar, a la economía social, solidaria, popular, a

la búsqueda de formas más justas de vinculación entre los actores económicos. En forma diferente, en Europa y en Estados Unidos, las experiencias conocidas parecen ser traccionadas por los consumidores que demandan productos que contribuyan a mejorar el medio ambiente y la calidad de los alimentos, productos orgánicos, valorización de lo local (Craviotti et al., 2017). En Argentina, sin embargo, en los últimos años comenzó una demanda creciente de sectores de ingresos medios/altos por productos, en particular, frutas y verduras agroecológicas u orgánicas.

Estos espacios alternativos son circuitos comerciales cortos porque su principal herramienta es eliminar la intermediación parasitaria (máximo un eslabón, que no necesariamente es de proximidad geográfica, como ocurre en las Comercializadoras de Intermediación Solidaria-CIS). Interpelan, ponen en cuestión a las llamadas cadenas de valor agroalimentarias en temas tales como las semillas, los insumos, los bienes naturales y la elaboración de alimentos que se encuentra en manos de empresas que buscan maximizar ganancias y no alimentar de la manera más sana a la población o cuidar el ambiente.

Hacia adentro del sector, nos venimos problematizando algunos nudos o cuestiones que tienen que ver con: 1) el tipo de actor económico que organiza y decide en el espacio: productores, consumidores, intermediación solidaria, sector público; 2) el tipo de reproducción de los productores y del espacio comercial (deficitaria, simple o ampliada); 3) el tipo de trabajo/trabajador que gestiona el espacio y el cómo, la gestión; 4) las relaciones con los y las consumidores; 5) qué políticas implementar entre nosotras y nosotros, los que estamos en los circuitos por ahora alternativos; y, por último, 6) en qué políticas públicas deberíamos concentrar nuestras demandas.

138

Estos son los interrogantes a los que me voy a referir a continuación:

### **1. Tipo de actores que organizan y deciden en el espacio con quienes se relacionan, nombres de algunas experiencias y lugares de venta y distribución.**

La **tabla 1** presenta una tipología de circuitos cortos de comercialización que son espacios comerciales alternativos de la Agricultura Familiar y la Economía So-

**Tabla 1.**  
Circuitos cortos de comercialización. Espacios comerciales alternativos de la Agricultura Familiar y la Economía Popular y Solidaria

Quiénes deciden/organizan	Qué hacen y con quién se relacionan	Experiencias	Forma social del trabajo	Principales tensiones
1.1. Productores familiares	1.1. Consumidores	1.1. Ferias de la AF y la ES (Tres Arroyos, Oberá, La Banda)	1.1. Trabajo voluntario	*Producir o comercializar
1.2. Productores familiares organizados	1.2. Consumidores, comercio minorista, Estado, CIS	1.2. Almacenes de la UTT, Cooperativa de productores 2 de setiembre Pilar, Los Pibes, Fopal, Mecopo	1.2. Trabajo cooperativo	*La gestión *Trabajo político o para el mercado
2. Consumidores	Compran a productores y distribuyen a socios/consumidores	Cooperativa de Consumo La Yumba, Cooperativa de Consumo Consol, Mecopo, Organización Los Pibes, Almacoop	Trabajo voluntario, asalariado, monotributista	*Precios a los productores vs. precios a los socios/consumidores *La gestión *Trabajo político o para el mercado
3. Comercializadoras de Intermediación Solidaria (CIS)	Compran a productores y venden a consumidores	Colectivo Solidario, Caracoles y Hormigas, Almacén Autogestivo y Mercado Territorial, Más cerca es más Justo, Mecopo, Puente del Sur, Iriarte Verde	Trabajo cooperativo	*Remuneración de las y los trabajadores como variable de ajuste para asegurar el precio que fija el productor y el precio razonable al consumidor. *La gestión *Trabajo político o para el mercado
4. Sector público 4.1. Intermediario	4.1. Conecta/facilita, compra a productores y vende a población/consumidores	4.1. Feria Manos de la Tierra (UNLP), Feria de la ES (UNLAM), Ferias de la ES (UNICEN), Feria Agronomía (UBA), etc. (insertas en universidades o ministerios)	4.1 Voluntario, asalariado, universidades públicas	4.1 Garantizar la inocuidad de los alimentos que se comercializan en espacios públicos
4.2. Comprador	4.2. Compra a productores y vende a población/consumidores	4.2 El Prohuerta (MDS/INTA) le compra semillas hortícolas a Cooperativa Fecoagro para familias, escuelas y otras instituciones sociales	4.2 Asalariado estatal	4.2 Cupo mínimo para AF y ESPyS y mecanismos de financiamiento de pronto pago

Nota: los textos en color de la última columna de la derecha (la columna "Principales tensiones") identifican las tensiones que parecen comunes a los diferentes tipos de espacios comerciales.

cial, Popular y Solidaria.

Antes que nada, hay que señalar que son tipos puros. En la realidad, una misma organización puede funcionar como productora, como consumidora y también como comercializadora solidaria, aun cuando no es lo habitual.

1. Productores organizadores que venden a: a) consumidores como en la gran mayoría de las ferias francas que funcionan en todo el país en terrenos municipales, con una frecuencia habitualmente semanal, a veces sin más apoyo que el aval de una ordenanza del Consejo Deliberante, b) la UTT con sus Almacenes de Ramos Generales o los feriazos o alimentazos en diferentes plazas del país; cooperativas mayoristas de frutas y verduras como la Cooperativa mayorista 2 de setiembre, de Pilar, o el Mercado Mayorista Agroecológico también de la UTT, en Lanús, o la Organización Social y Política Los Pibes, Mecopo.

La principal tensión tendría que ver con la gestión de los tiempos entre dos tareas diferentes que son producir y comercializar en manos del mismo actor, con la disputa por los recursos de todo tipo que ello implica.

2. Consumidores organizadores en relación directa con productores. Nodos de consumidores, Cooperativa de Consumo La Yumba, Cooperativa Consol, Organización Los Pibes, Mecopo, Almacoop.

Le compran a la AF y la ESPyS y distribuyen entre sus socios/integrantes.

La forma predominante, la que en general aspiran alcanzar, es la de cooperativa de consumo. Por cierto, existen muchas organizaciones que funcionan de hecho, sin ninguna figura jurídica, con los problemas que esta situación les acarrea para moverse en la compra de productos.

La forma social del trabajo predominante es voluntaria, y existe también la contratación para algunas tareas puntuales de técnicos y/o administrativos.

La principal tensión de las formas organizativas que representan a los consumidores organizados consiste en ser fieles al mandato de sus socios/integrantes y consumidores: acceder a mejores precios que los supermercados, pero hacerlo

comprando productos provenientes de la economía social/popular (siempre que ésta los produzca). En este punto, se diferencian entre las que, en caso de faltante de un producto, se proveen de pymes nacionales; y las que para responder a sus consumidores le compran a pequeñas, medianas o aún grandes empresas en función de los precios, principalmente.

3. Intermediarios organizadores que se autodenominan Comercializadoras de Intermediación Solidaria (CIS). Son referentes en esta modalidad: Más Cerca es más Justo, el Instituto para la Producción Popular, Colectivo Solidario, Caracoles y Hormigas, Puente del Sur, la Cooperativa Despierta Voces y el Mercado Territorial de la Universidad de Quilmes, el Transformador, Mecopo, Iriarte Verde, Popularia, entre otras muchas.

En general, forman cooperativas de trabajo, es decir que predomina el trabajo asociativo, cooperativo y se relacionan con los productores en tanto que proveedores y con los consumidores en tanto que compradores. Una tensión que caracterizaría a este espacio tiene que ver con que, al priorizar una remuneración justa a las y los productores y a las y los consumidores, el valor agregado que queda para los integrantes de la cooperativa de trabajo en general no permite una remuneración adecuada.

#### 4. Sector público organizador.

4.1. El sector público como intermediario se expresa en las ferias o bolsones agroecológicos que funcionan en varias universidades (UNLP, UNQUI, UBA, UNLAM, UNGS, UNICEN, UNMdelp y otras). Predomina el trabajo voluntario de feriantes, estudiantes y docentes de esas casas de estudio.

Una tensión con las ferias en universidades tiene que ver con la inocuidad, con la sanidad de los alimentos que se comercializan en sus recintos.

4.2. El comercio público –que en lo que hace a alimentos no funciona prácticamente en Argentina– ha sido muy bien analizado como propuesta de política pú-

blica en una publicación de INTA<sup>4</sup>. Y se contempla en la Ley 27.118 de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar que aún no ha sido reglamentada y carece de presupuesto.

Cuando el Estado es el que organiza el proceso, el trabajo es asalariado, de su personal técnico y administrativo. En el estudio mencionado de INTA se señalan dos puntos de tensión en esta modalidad comercial, uno referido a la necesidad de definir un cupo mínimo para este sector, y el otro tiene que ver con el establecimiento de mecanismos de financiamiento para un pronto cobro por parte de los productores. El compra público también surgió como propuesta del reciente Foro Agrario Nacional<sup>5</sup>.

## 2. Tipo de reproducción socioeconómica de productores y de los espacios comerciales<sup>6</sup>

No pocas veces los aparentes problemas de comercialización constituyen el momento más visible de una situación que se origina en la esfera de la producción por restricciones en la tierra, el agua, las maquinarias o herramientas, etcétera. En estos casos, de situaciones de reproducción deficitaria, un mercado alternativo no resolvería los problemas. La esfera de la producción es clave: se comercializa, en prin-

---

<sup>4</sup> Está contemplado en “la ley de reparación histórica de la Agricultura Familiar (ley 27118), que en el artículo 22, plantea la prioridad absoluta de las compras públicas a los productores de la Agricultura Familiar, genera un importante hecho político a partir del cual poder avanzar en la institucionalización de estas políticas. Sin embargo, se cree necesario avanzar en otras normativas (leyes, resoluciones), que permitan establecer un cupo mínimo para la compra de alimentos a la Agricultura Familiar, así como prever mecanismos de financiamiento adecuados que permitan un pronto cobro por parte de los productores familiares” (Dumrauf, Lopez Saubidet, Moricz, Mosse, Viteri; 2015).

142 <sup>5</sup> Organizado por más de ochenta organizaciones vinculadas al sector agropecuario (producción, industrialización, comercialización, consumo y ciencia y tecnología) con una participación de más de 3.000 personas de todo el país con el objetivo de elaborar propuestas de políticas públicas para presentar a los diferentes partidos políticos. Se realizó el 7 y 8 de mayo en el Club Ferrocarril Oeste.

<sup>6</sup> La reproducción puede ser deficitaria (el valor agregado obtenido no permite una remuneración digna del trabajo, no alcanza a renovar los insumos, la materia prima y la maquinaria en el mismo nivel para reiniciar un nuevo ciclo productivo), simple (remunera siempre al mismo nivel el trabajo, pero no mejora, está estancando) o ampliada (amplía entre un ciclo y el otro las posibilidades de mejorar su trabajo y su vida).

cipio, lo que se produce. Los crecientes controles estatales en temas bromatológicos desafían al sector en el sentido de garantizar la inocuidad de los alimentos, más allá de los registros o controles públicos.

Las ferias de relación directa entre productores y consumidores, por su frecuencia, por la infraestructura simple que requieren, son opciones frecuentes para los productores de reproducción simple.

Las organizaciones de comercialización y consumo, o más aun, las que están en el compra público, tienen requisitos más exigentes que solo pueden cumplir los productores familiares más capitalizados, por sus posibilidades de asegurar cierta cantidad, calidad y continuidad de la producción.

La reproducción de este tipo de espacios comerciales alternativos no está asegurada. Solo una pequeña proporción de estas modalidades alternativas obtiene excedentes. Asignarle un precio justo al productor y un precio razonable al consumidor, en muchos casos estrecha el margen de ingresos, y es la retribución de los propios trabajadores y trabajadoras de las CIS o de las cooperativas de consumo la variable de ajuste. En el informe IPOD de junio pasado de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), en promedio la diferencia de precios entre productor y consumidor de una canasta de treinta verduras y frutas de las más consumidas, fue de cinco veces más. En nuestra cooperativa, el precio del bolsón de verduras tiene un diferencial entre productor y consumidor de 0,5 veces (que incluye el flete y otros gastos de comercialización a cargo de la cooperativa). Entre el 60 y el 70% del precio que paga el consumidor queda para el productor según el relevamiento de Comercializadoras Solidarias (Observatorio de la ESyP, 2019). En los supermercados es exactamente al revés.

### **3. Organización del trabajo y gestión.**

Los espacios comerciales analizados se diferencian en cuanto a la forma social del trabajo: voluntario, asociativo, asalariados del mismo espacio, del Estado, de ONGs, etcétera. En general, las ferias, con alta participación de los productores de subsistencia, cuentan con trabajo voluntario y de asistencia de técnicos asalariados del Estado o de ONGs que se fueron formando a partir de sus experiencias. En las

cooperativas de consumo predomina el voluntario o remunerado por la propia cooperativa y en el Estado el trabajo está a cargo de técnicos y administrativos asalariados que garantizan cierta sostenibilidad, aunque el compromiso con la calidad de la gestión suele ser muy variable. Por su parte, las experiencias de intermediación o comercialización solidaria están mayormente organizadas como cooperativas de trabajo, es decir, predomina el trabajo asociativo. La gestión de estos espacios comerciales es un tema de tensión en general, suele observarse una limitada especialización y diferenciación de roles y de responsabilidades, y tensiones entre el trabajo para el mercado y el trabajo político. Las remuneraciones son, en general, bajas, y predomina la figura del monotributista con las restricciones que la misma tiene en materia de seguridad social para las y los trabajadores. El trabajo se asienta en un fuerte compromiso político con la experiencia.

#### 4. Relación con los consumidores.

En todas las modalidades analizadas se observa un cuidado especial del o la compradora hacia el o la productora de la AF o de la ESSyP, por valorizar su trabajo, por su palabra, por respetar sus costos. Al mismo tiempo, el vínculo suele tener algún punto de tensión: por los productos que no llegaron, por el envase, por lo que se estropeó en las bolsas, por el etiquetado, por la falta de fecha de vencimiento, etcétera.

En algunas experiencias, los consumidores se organizan en nodos de consumo, en otros, en cooperativas, aunque lo habitual es el consumidor no organizado, el 79% de los clientes son individuales y el 11% son compras colectivas (Observatorio 2019). De las experiencias revisadas es posible identificar tipos de consumidores según los motivos por los cuales compran en este tipo de mercados no convencionales: a) productos frescos, naturales, sanos, salud; b) productos más baratos que en los supermercados, verdulerías y otros comercios minoristas; c) precio y calidad de productos diferentes, *specialities*, ricos, calidad del diseño, turistas, sectores de ingresos medio/altos y altos; d) productos/productores de la Economía Social y Solidaria, Popular, Agricultura Familiar que daría cuenta de un consumidor ligado por valores y prácticas en relación con otras formas de organizar la economía, es decir más político. La mayoría de las y los consumidores de estos espacios buscan calidad de los productos y buscan a productores de otra economía (social, solidaria,



popular; agricultura familiar). Y buscan ambas cosas: lo económico y lo inmaterial (Dziencielsky, 2019). Sin embargo, entre los motivos económicos de sus compras hay aspectos que son medianamente poco aceptados y que se relacionan con la logística de la distribución, con la falta de practicidad de las compras, con la limitada variedad de productos y con la falta de tarjetas para el pago (CEFESS, 2017; Dziencielsky, 2019).

Con respecto al perfil socioeconómico de las personas consumidoras de las comercializadoras, redes y grupos de consumo y ferias, predominan mujeres de edad intermedia (30-40) y avanzada (41-60), con estudios universitarios, de ocupaciones asalariadas permanentes y cuentapropistas, con ingresos de clase media. Moricz y Mosse señalan que estos datos coinciden en gran medida con otros estudios (Caracciolo y Basco, 2013).

Asimismo, en cuanto a las formas de difusión de este tipo de canales, el estudio mencionado coincide con los datos recabados por otros estudios (Alcoba et al., 2011) que señalan la importancia de las redes personales como forma de difusión de los canales cortos. Se preguntan los autores Moricz y Mosse sobre el impacto que tendría una estrategia de comunicación orientada a atraer consumidores ajenos a las redes interpersonales más inmediatas.

En el estudio que realizamos en el CEFESS de La Yumba, relevamos que los productos más consumidos son: panificados, pastas, dulces, aceites, tapas de tarta y empanadas, productos de limpieza, lácteos, quesos, yerba y tomate triturado; es decir, son productos de consumo masivo, no *specialities* como señalan en otro estudio Moricz y Mosse (2019).

A los socios que compran en La Yumba se les solicitó en las entrevistas que formularan propuestas para mejorar la cooperativa, tanto en el proceso de compra como en los productos. Estas son sus sugerencias: seguir mejorando la calidad de los productos (controlar fechas de elaboración y de vencimiento), incorporar más variedad de productos (huevos, lácteos, frutas y verduras, carnes, pasta fresca). Y en cuanto al proceso de compra: días y horarios de entrega más amplios, mayor frecuencia, adecuar los locales (nodos) para la venta de alimentos, tener un local

apto para que la venta sea más masiva, llegar a más gente y poder comprar en cualquier momento y con todos los productos a la vista, incorporar tarjetas para el pago. Imágenes y mejor descripción de los productos en las ventas por internet, mayor frecuencia de compra (quincenal en lugar de mensual). La maduración de la cooperativa ha permitido incorporar varias de las propuestas de sus socios.

En síntesis, los problemas más recurrentes en los espacios comerciales alternativos, según surge de los estudios mencionados (CEFESS de la Cooperativa La Yumba, 2017; Moricz, Mosse y Manzoni et al., 2018; Dziencielsky, 2019) y de mi propia experiencia con el sector serían: 1) las compras por Internet –la mayoría de las intermediadoras solidarias y algunas cooperativas de consumo utiliza este medio, aunque no es exclusivo porque algunas como La Yumba o Colectivo Solidario se combina con la venta en locales propios– llegan mayormente a un consumidor de ingresos medios, no pocos consumidores sostienen que les gusta ver y tocar el producto que van a elegir; 2) la frecuencia de la entrega de pedidos suele ser quincenal o mensual, pero la demanda de los sectores populares es más frecuente (poca plata y pocas compras); 3) la oferta de productos no cubre el tipo de producto demandado por cada tipo de consumidor o consumidora, poca variedad, en algunos casos faltan las hortalizas pesadas y/o las frutas o faltan las gaseosas o cierto tipo de galletitas; 4) los precios no son significativamente inferiores a los de las grandes cadenas porque éstas remuneran mal el trabajo del productor o productora; 5) nuestros espacios no ofrecen productos de inferior calidad a un precio también inferior como hacen los supermercados; 6) la incomparablemente mayor capacidad financiera de los súper que también han logrado financiarizar la compra y venta de alimentos.

Como es posible observar, varias organizaciones han avanzado en lo que hace a la logística y practicidad de las compras mediante locales a la calle, vehículo propio, entregas a domicilio, mayor variedad de productos, aun cuando la falta de escala continúa incidiendo en los costos.

De todos modos, a nivel micro, para cada emprendimiento aislado esto parece de difícil solución. La competencia con el supermercadismo es muy despareja. Como plantean Viteri y Tapia (2019), los supermercados tienen su flota de vehícu-

los (propios o tercerizados) refrigerados y muchos computarizados; su variedad de productos –miles–; el uso intensivo de TICs; sus plataformas logísticas que les permiten ahorrar tiempo, espacio y no perder calidad; con la compra ofrecen la posibilidad de sacar plata, tarjetas de fidelización, descuentos, patios de comidas. Además, hoy en día solo tratan con grandes distribuidores que cuentan con la logística, calidad y condiciones financieras para sostener las extensas cadenas de pago de los supermercados. En términos generales, éstas son las razones que impulsan a millones de consumidores a comprar en los supermercados.

### **Políticas hacia adentro de las organizaciones y del sector público para los circuitos cortos de producción, comercialización y consumo de alimentos**

A través de mi participación en La Yumba y en varios espacios que estamos construyendo están surgiendo propuestas con la idea de fortalecerlos en el marco de la ESyP, aunque aclaro que no hablo en representación de los mismos.

- Unirnos, organizarnos sectorialmente entre todos los espacios de mercadeo de alimentos (como lo hicieron los gráficos, los textiles, frigoríficos) para planificar y gestionar lugares de acopio, compras, ventas, acceso a financiamiento, comunicación, etcétera. Pelear licitaciones en los municipios, en universidades y otros espacios amigables. Nos estamos organizando como grupo de Consumidores Populares a partir del Foro Agrario Nacional y del de Cooperativas Autogestionadas y Economía Popular realizados en Buenos Aires en los últimos meses para tratar de construir tramas de valor con los actores vinculados a la producción de bienes y servicios alimentarios. Empezando por identificarnos –hay muchísimas experiencias de este tipo en todo el país que aquí en Buenos Aires no se conocen– y comprarnos y vendernos entre nosotros.
- La comercialización está indisolublemente unida a la esfera de la producción, no nos podemos desentender ni desconocer cómo se produce, con qué materias primas, tecnologías, qué problemas tienen los productores para bajar sus costos, etcétera. Con los proveedores hay que hablar y trabajar todos estos temas. Aceptar sin más los precios que fijan los productores, o los que fijan las CIS, dificulta las mejoras en la productividad. Deberíamos mejorar la productividad sin tener pru-

ritos. El problema no es la productividad en sí misma (por el contrario, nos permitiría emplear menos tiempo, insumos o materias primas) sino cuando se la apropia un empresario capitalista (Lipsich, 2018). Tenemos que superar el capitalismo con mayor eficiencia y eficacia para solucionar el acceso a alimentos sanos, seguros y soberanos, entre otros temas. En nuestras economías se traduce en mayor valor agregado por trabajador, trabajadora y por organización: para el territorio hay que incorporar tecnologías. Se puede mejorar la productividad mejorando la calidad de la producción, particularmente en temas de mejor procesamiento de materias primas, inocuidad, sanidad, conocer la trazabilidad, monitoreo de la gestión de calidad, mejora continua (Gurisatti, Lipsich et al., 2009), etiquetado de productos, y un tema central que es avanzar hacia una transición agroecológica. El Ministerio de Agricultura, el INTA, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), el Instituto Nacional de Alimentos (INAL) y las universidades podrían experimentar, dar asistencia técnica y capacitar en el tema.

- Bajar los costos unitarios de la comercialización: los súper avanzan cada vez más en este terreno. Mejorar la infraestructura para acopio, conseguir fletes propios. El Estado tiene un papel importante en la construcción de una infraestructura comercial.
- Capacitación y apoyo técnico en temas empresariales (porque somos organizaciones con fines económicos, aunque no tengamos fines de lucro). Por ejemplo, logística, estrategias de mercadeo, software, etcétera. Aquí podría haber apoyo de las universidades nacionales.
- Hay mucho por mejorar en la comunicación dirigida a los que no están conociendo la ESSyP, o que por ahora no adhieren políticamente pero que les interesa comer más sano, más fresco. El tema es ver cómo llegamos a esa gente. En esto también podría haber apoyo de las universidades nacionales.
- El consumo de alimentos sanos y accesibles es excelente para interpelar a los varones y desnaturalizar su falta de involucramiento en el tema debido a la división del trabajo según el género.

## Políticas públicas

Para mover el amperímetro hacia un consumo popular que sea accesible, sano, de calidad y fresco se requiere dejar de considerar a los actores de la AF y EPyS con una visión asistencial o de contención y pasar a implementar políticas que los consideren actores económicos capaces de resolver las demandas socialmente necesarias de la población (Martínez, 2015). Para transitar desde el financiamiento de las experiencias puntuales o focalizadas –tal como implementa actualmente de manera muy eficiente el Programa Mercados Solidarios de la Secretaría de Economía Social del Ministerio de Desarrollo Social 2019– que encaren, mediante una nueva institucionalidad que recoja lo que se está haciendo en los territorios. Políticas públicas que promuevan soluciones masivas de abastecimiento a nivel local, de cada comuna, de cada barrio, vinculando a productores con consumidores locales, y no solo en lo que hace a la provisión de alimentos, sino también en lo referido a la vestimenta, energía, vivienda, etcétera (Martínez, 2015). En ciertos casos, los productores necesitan mercados regionales o nacionales, para lo cual la Ley de Agricultura Familiar propone la creación de una Red Nacional de Comercialización<sup>7</sup>. Por cierto: cinco años después de su formulación hemos avanzado en la mirada, y podríamos aprovechar su demorada reglamentación para superar el enfoque productivo y conectarla con las necesidades alimentarias de la población.

Carece de una lógica de efectividad socioeconómica que la gente que recibe el salario social complementario que le da el Ministerio de Desarrollo Social lo gaste

---

<sup>7</sup> Ley 27.118 de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar. ARTÍCULO 22. El Ministerio impulsará: 1. La realización de ferias locales, zonales y nacionales, y pondrá especial énfasis en la conformación de una cadena nacional de comercialización, articulando estructuras propias, cooperativas de productores o instancias mixtas cuando resulten necesarias. 2. La promoción de marcas comerciales y denominaciones de origen y otros mecanismos de certificación, como estrategia de valorización de los productos de la agricultura familiar. 3. La compra de alimentos, productos, insumos y servicios provenientes de establecimientos productivos de los agricultores y agricultoras familiares registrados en el Registro Nacional de Agricultura Familiar (RENAF) tendrá prioridad absoluta en las contrataciones directas que realice el Estado nacional para la provisión de alimentos en hospitales, escuelas, comedores comunitarios, instituciones dependientes del Sistema Penitenciario Nacional, fuerzas armadas y demás instituciones públicas dependientes del Estado nacional. A tal fin se deberán suscribir convenios de gestión con las distintas jurisdicciones a fin de fijar metas y objetivos a cumplir.

en las cadenas de supermercados y no le compre a la AF y ESyP. Parafraseando a un ex senador: la Asignación Universal por Hijo no se puede ir por las cajas de los súper, sino que se debe gastar en comprar a la misma AF y ESPyS, porque si se compra dentro de la trama la plata circula en su interior. Y, por cierto, el desarrollo económico de este sector requiere subsidios con una lógica de desarrollo y no asistencial. Antecedentes institucionales existen; organizaciones de producción, comercialización y consumo popular, también. Falta la decisión política<sup>8</sup>.

Los alimentos no son lo mismo que los comestibles, productos poco sanos, ultraprocesados, con conservantes, saborizantes, endulzantes, sal, azúcar, etcétera. Venimos diciendo que los alimentos no deben ser una mercancía más en manos de la oferta y la demanda, del mercado, hoy –para peor– dolarizado. Si queremos ampliar estos espacios, no alcanza con organizar o fortalecer a nivel micro una experiencia aislada, por mejor que sea, ni alcanza con el microcrédito.

Es preciso planificar para vincular de la manera más efectiva las necesidades de consumo de la población con la oferta de la AF y ESyP. La nueva institucionalidad debería identificar las necesidades y relacionarlas con la oferta actual y potencial de bienes y servicios alimentarios de cada territorio. De manera que las modalidades concretas que vaya a adoptar la relación de productores con consumidores en cada territorio, sin duda, variarán: ferias, mercados concentradores cooperativos, estatales o mixtos, almacenes autogestivos, cooperativas de consumo, de trabajo o de comercialización, compre público, etcétera, para universalizar el acceso a los alimentos. Es decir, construcción de tramas de agregación de valor con actores in-

<sup>8</sup> A comienzos de 2015, la Subsecretaría de Ejecución de Programas de la Secretaría de Agricultura Familiar (SSEPAF) propuso diseñar e implementar un Programa de Abastecimiento Local a partir de la producción, transformación y comercialización de alimentos variados y sanos de los y las agricultoras familiares y agroindustrias locales, cuya prueba piloto se llevó adelante en un par de municipios. A la vez, buscaba mejorar la calidad, variedad y precios para acceder a los mismos por parte de los consumidores y reducir la “importación” de alimentos de otras zonas y regiones del país. En el aspecto institucional, la propuesta promovía la participación de organizaciones de agricultores y agricultoras familiares y, donde las hubiera, de consumidores y consumidoras, asignando al sector público un lugar clave en temas de sanidad (SENAF), de oferta de espacios, generación de condiciones impositivas y bromatológicas, pero también de financiamiento, asistencia técnica y articulación institucional a través de las coordinaciones provinciales de la SAF y otras instituciones relacionadas al sector (Gentileza de Susana Soverna).

volucrados en la producción, comercialización, distribución, consumo, asistencia técnica, financiamiento, etcétera, de bienes y servicios alimentarios. Es síntesis, se requiere –para cualquiera de las modalidades reseñadas al comienzo– inversión pública, orientada territorialmente y en articulación con las organizaciones existentes.

¿Y si no la hubiera, al menos en el corto plazo? Mi planteo no es de fuertes requisitos de apoyo estatal para avanzar, se requiere mínimamente que la producción vuelva a funcionar. En esto me sumo a la propuesta de estrategias intersticiales de Erick Olin Wright (2015), aun en contextos políticos poco favorables en los cuales hay un largo camino a transitar que avance más allá de lo testimonial tendiendo a formas de abastecimiento de mayor alcance para todos y todas.